

Santiago, siete de junio de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En esta causa RUC N°2300651632-7, RIT N°302-2023 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, por sentencia de dos de abril de dos mil veinticuatro, se condenó al acusado **Matías Alejandro Cárcamo Pichunhuala**, a las penas que a continuación se señalan, por su participación en los delitos que se indican:

a) A la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en grado mínimo y al pago de la multa de diez (10) Unidades Tributarias Mensuales, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1° de la Ley N°20.000, perpetrado el 15 de junio de 2023

b) A la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en grado mínimo, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego, previsto y sancionado en los artículos 2 letra b) y 9, inciso primero, en relación con el artículo 12, todos de la Ley N°17.798, perpetrado en la misma fecha.

c) A la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en grado medio, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de municiones, contemplado en el artículo 9, inciso segundo, en relación con el artículo 2, letra c), de la Ley N° 17.798, pesquisado el mismo día ya señalado.

d) A la pena de sesenta y un (61) día de presidio menor en grado mínimo, autor del delito de Receptación de especies, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, perpetrado el mismo día ya mencionado.



Se le condena, además, a las penas accesorias legales correspondientes y se dispuso que las penas privativas de libertad impuestas debían ser cumplida de manera efectiva.

En contra de la decisión condenatoria, la defensa del sentenciado Cárcamo Pichunhuala dedujo recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada al efecto el veinte de mayo último, como consta en el acta que se levantó con igual fecha.

**CONSIDERANDO:**

1º) Que la defensa del sentenciado alega, como única causal de nulidad fundante del recurso, la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al haberse descartado la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal.

Explica que la judicatura del fondo, bajo una brevísima argumentación, decide desestimar la aminorante de responsabilidad alegada por la defensa, prevista en el artículo 11 N°9 del Código sustantivo, esto es, la colaboración sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, esbozando ciertos criterios que no justifican la decisión, pues no permite la reproducción de su razonamiento, en el que, además, efectúa una errónea aplicación de esta norma.

Para desestimar la atenuante alegada, el tribunal, en el fundamento 21º de la sentencia impugnada calificó como abundante la prueba allegada por el Ministerio Público para acreditar el hecho ilícito y la participación del acusado. Sin embargo, la “abundante” prueba para acreditar la participación de su defendido no existió, pues sólo consistió en la declaración de los funcionarios



de Carabineros Antonio Salazar Landeros y Ricardo Martínez Sandoval, quienes participaron en la diligencia investigativa de entrada y registro al domicilio del sentenciado, siendo la demás prueba incorporada por el acusador idónea para acreditar únicamente los ilícito que se estimaron configurados.

La defensa postula que la sentencia recurrida yerra al dejar de aplicar la atenuante en comento bajo una errónea interpretación, al considerar que la colaboración prestada por el acusado durante la investigación penal y en el mismo juicio oral, no fue sustancial, a pesar de que desde los actos iniciales del procedimiento su defendido señaló a los funcionarios policiales que todo lo que estaba al interior del domicilio allanado era de su propiedad, misma declaración que efectuó en el juicio oral, la que incluso se vio refrendada mediante la exhibición de prueba audiovisual, en que así lo expresó. Sostiene que si bien pudo existir algún tipo de inconsistencia en cuanto a quien era el legítimo dueño de las armas, este antecedente no tiene influencia en los tipos penales por los cuales fue acusado y resultó condenado, siendo claro que la actitud de su defendido desde los inicios del procedimiento ha contribuido para su propia condena.

Agrega que la sentencia recurrida, en sus fundamentos 9°, 13°, 15° y 18°, alude al reconocimiento del propio acusado en la posesión de las especies incautadas, asignándole valor a las declaraciones vertidas por éste en la etapa de investigación y en el propio juicio oral, para acreditar su participación. Sin embargo, contradiciendo esas conclusiones, la magistratura del fondo decide no estimar concurrente la aminorante en examen, cuestión que necesariamente repercutió en la cuantía de la pena impuesta.

Alega que exigir que su defendido sindicara en el juicio a las personas que le encargaron el resguardo de las especies, no es parte del tipo penal y en



nada aporta al esclarecimiento de los hechos, puesto que el solo hecho de poseer o tener en su poder estas especies (droga, armas, municiones) es suficiente para configurar los tipos penales por los cuales resultó condenado.

Hace presente lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Arica y la Excm. Corte Suprema, en causa Rol 5741-05, así como lo sentenciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en causa Rol 638-2023, concluyendo que la aludida atenuante no exige que el imputado deba confesar en forma detallada los hechos imputados, ni incriminar a terceras personas, bastando que durante la investigación el mismo haya desarrollado actos positivos de colaboración, de modo sustancial para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que hayan constituido un aporte efectivo y serio a la investigación, como ocurrió en la especie.

Asegura que el error jurídico denunciado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, desde que, habiéndose reconocido la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, y debiendo haberse considerado concurrente la morigerante del artículo 11 N° 9 del mismo Código, la sentencia objetada debió imponer a su defendido una pena inferior en un grado, como sanción por su participación en los delitos de tráfico de drogas y receptación de especies.

Finaliza solicitando, se anule la sentencia y se dicte, sin nueva audiencia, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que condene al acusado a una pena de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, e imponga una pena de multa de media Unidad Tributaria Mensual por el delito de receptación de especies.



2º) Que, para la debida comprensión del recurso de nulidad deducido, útil resulta recordar que la sentencia impugnada, en su fundamento 16º, tuvo por acreditado el siguiente hecho:

*“El día 15 de junio de 2023, a las 07.10 hrs aproximadamente, en virtud de orden de entrada, registro e incautación autorizada por Juzgado de Garantía de Lautaro, procedieron a ingresar al domicilio ubicado en Wunman Amanecer N° 410, 2º piso, comuna de Lautaro, constatando que el imputado Matías Alejandro Cárcamo Pichunhuala mantenía, almacenaba, guardaba y poseía, las siguientes especies: 790 gramos de una sustancia vegetal color verde, que arrojó positivo para cannabis THC; 1 escopeta calibre 20 marca Arthur Howell serie nro. 7593, que mantiene encargo por robo nro. 0346-09-2019; 1 escopeta calibre 16 marca Winchester serie nro. c1091925 mantiene encargo por robo n° 00074-01-1998; 1 revólver calibre 32 marca Smith y Wesson serie nro. 649174 sin encargo; 11 cartuchos calibre 16, marca Mirage, color gris; 1 cartucho, calibre 12, color naranja, marca gb; 8 cartuchos, calibre 20, color rojo, marca Mirage; 9 cartuchos calibre 20, color amarillo, marca Reminton; 28 cartuchos, calibre 20, color amarillo, marca Mirage; 1 cartucho, sin marca ni calibre; 1 proyectil sin marca; sin contar Cárcamo Pichunhuala con ningún tipo de autorización para guardar, portar, mantener, almacenar dichas especies, asimismo mantenía 1 balanza digital, sin marca, color gris y 1 balanza digital, color negro con tapa; y, \$861.000 en dinero efectivo”.*

3º) Que el hecho antes transcrito, fueron calificados por la judicatura del fondo como constitutivo de los delitos consumados por lo que el sentenciado resultó condenado, en calidad de autor, en los términos descritos en el artículo 15 N°1 del Código Penal, al haber intervenido en los hechos de manera inmediata y directa;



4°) Que, para desestimar la atenuante alegada por la defensa, de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, la sentencia impugnada, en el considerando 21°, concluyó:

*“[...]”*

*Sin embargo, se rechazará la minorante alegada del artículo 11 N°9 del Código Penal, por no reunirse los requisitos que la hacen procedente.*

*En efecto, dicha minorante conforme lo señalado por la doctrina y la jurisprudencia, está relacionada con la conducta del acusado posterior al ilícito y, por lo tanto, para que ella pueda ser considerada, deben darse copulativamente los requisitos de colaboración, sustancialidad y que implique aclarar aspectos oscuros en la determinación de los hechos, es decir, que la colaboración tenga eficacia en términos que permita dilucidar situaciones fácticas no resueltas por el órgano persecutor.*

*Sin embargo, la abundante prueba de cargo rendida en estrados, fue absolutamente suficiente a juicio de estos sentenciadores, para efectos de confirmar los hechos de la acusación, sin que la declaración del acusado aportara antecedentes relevantes, más allá que se haya situado en el sitio del suceso, por cuanto en todo momento intentó desprenderse de responsabilidad, otorgando una versión acomodaticia y derechamente inverosímil, respecto a la existencia de armas en el domicilio que habitaba, atribuyéndole su propiedad a sujetos que se negó a identificar, versión que por cierto, fue desestimada por estos sentenciadores.*

*Sobre ello, resulta necesario recordar que, el acusado al ser interrogado por el Fiscal sobre la muerte de la víctima, sólo se limitó a señalar que, “Las armas estaban en la habitación, pero él no sabía que estaban ahí. Alcanzó a estar dos semanas en ese inmueble, pero no entró en las dos semanas a la*



*habitación, porque no conocía a las personas, le dijeron que no podía entrar esa parte, no sabía si tenían algo como para saber si él entró a esa pieza”, lo que por cierto en nada aporta al esclarecimiento de los hechos.*

*Así, no es suficiente la mera renuncia al derecho a guardar silencio para estimar que existe colaboración sustancial; ya que se deben aportar antecedentes concretos de los que carezca el ente persecutor, pues de otra forma bastaría con declarar en el juicio oral para obtener una morigeración de pena, lo que no ha sido el espíritu ni la intención del legislador, razones por las cuales esta atenuante será desestimada”.*

En tanto, en el fundamento 18° de la misma sentencia, al abocarse a examinar la participación que le ha correspondido al acusado en los ilícitos que le fueron atribuidos, estima que resultó acreditada con los asertos de los funcionarios policiales Antonio Salazar Landeros y Ricardo Martínez Sandoval, corroborados con los Informes Periciales de Análisis Físico-Químico cualitativo N°1601 de 24 de agosto de 2023, en relación con la droga incautada, y lo expuesto por el perito Claudio Bravo Muñoz, respecto de las armas y municiones. Luego de esta conclusión, los sentenciadores agregan: *“Finalmente, al respecto, cabe señalar que el acusado parcialmente reconoce su participación en los hechos materia de la acusación, por cuanto se sitúa en el lugar de los hechos, reconociendo la posesión de la droga incautada y de manera implícita la tenencia de las demás especies encontradas en su domicilio”.*

5°) Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester recordar que la causal de nulidad invocada como único fundamento -la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal-, requiere para su configuración, conforme lo establecido en el artículo 376, inciso tercero, del Código Procesal



Penal, que el error de derecho denunciado se sustente en interpretaciones diversas sostenidas en fallos emanados de Tribunales Superiores, sobre el que se requiera que esta Corte Suprema ejerza sus facultades uniformadora del derecho, para lo cual el recurrente debe indicar de forma precisa los fallos en que se hubiere sostenido las distintas interpretaciones invocadas y acompañar copia de las sentencias o de las publicaciones que se hubieren efectuado del texto integro de las mismas.

6°) Que dada la conceptualización que el legislador ha hecho de la causal de nulidad en estudio, es menester para su procedencia, la concurrencia de, a lo menos, dos resoluciones que sustenten distinta línea de razonamiento al resolver una controversia de idéntica naturaleza, siendo de responsabilidad del recurrente no sólo acompañar las copias en que se plasman los pronunciamientos que se confrontan con el fallo impugnado o aludir el rol de los procesos donde fueron dictadas, sino que, además, el impugnante deber expresar de manera precisa y circunstanciada, en el cuerpo de su libelo recurso, las interpretaciones disímiles que se enfrentan, correspondiéndole la carga argumentativa relativa a explicar la dispersión jurisprudencial que pretende remediar.

De esta manera, no se aviene con la finalidad y sentido de la causal de nulidad en análisis, entender como cumplida dicha obligación, con una mera cita de los roles o una reproducción de fragmentos del fallo en que se sostiene la interpretación del precepto que el recurrente estima correcta, sino el recurso debe contener, como se señaló, las líneas argumentales que se infieren en las sentencias que se aparejan para su contraste, atendido los estrictos márgenes con que el legislador ha estructurado al arbitrio de nulidad en estudio.





**7°)** Que, además, de conformidad a lo previsto en los artículos 373 letra b) y 375 del Código Procesal Penal, el error del derecho que se denuncia en el recurso debe ser de carácter sustancial, esto es, con efecto determinante y decisivo en lo dispositivo del fallo para que resulte acogido.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de la protesta fundante del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados;

**8°)** Que, según se advierte de la lectura del libelo recursivo que se examina, es manifiesto que la recurrente solo expuso la interpretación jurisprudencial del artículo 11 N°9 del Código Penal que estima correcta, omitiendo toda referencia y explicación relativa al contenido y circunstancias de la interpretación jurisprudencial que se opone a ella, limitándose solamente a citar los roles de las sentencias que supuestamente contendrían una tesis jurídica diversa a la que postula y acompañando copia de ella, pero soslayando cualquier explicación sobre el contenido del pronunciamiento que efectúan, los contextos materiales homologables, y cómo su cotejo debe llevar a esta Corte a efectuar su labor uniformadora que pretende.

**9°)** Que, además, el error de derecho denunciado carece de la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo que exige el citado artículo 373 para ser acogida.

En efecto, mediante el reconocimiento de la mitigante prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, la recurrente persigue que en la sentencia de reemplazo la pena impuesta para el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y receptación de especies se rebaje en un grados, en lugar de la determinación que hizo en la sentencia impugnada, al concurrir dos atenuantes de responsabilidad penal (las de los ordinales 6° y 9° del artículo 11 del Código Penal), y no solo la que fue reconocida en el fallo -11 N°6-, sin embargo,



incluso de compartirse la interpretación que se postula en el recurso respecto de la atenuante en comento, el inciso segundo del artículo 68 del Código Penal, faculta al juzgador para rebajar la pena señalada en la ley en uno, dos o tres grados, en caso de concurrir dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, atribución inequívoca que se desprende de la locución verbal “*podrá*” que utiliza el legislador en el referido precepto, cuestión que la judicatura del fondo debe determinar conforme al número y entidad de las circunstancias atenuantes concurrentes, de manera que aún de estimarse la concurrencia de las dos mitigantes, igualmente la magistratura de fondo pudo no haber ejercido la aludida atribución, y con ello imponer las sanciones corporales determinadas en lo dispositivo de la sentencia objetada.

**10°)** Que, además, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento de las circunstancias morigerantes de responsabilidad penal está entregado por ley al tribunal de la instancia, que es el llamado a ponderar su procedencia según el mérito del proceso, lo que resulta de toda lógica, pues es ante el cual se ha rendido la prueba, el que ha tenido contacto e intermediación con la misma y con las intervinientes, es el que ha aquilatado su capacidad para acreditar hechos y el que por tanto, puede medir si se configuran las exigencias de las circunstancias modificatorias de responsabilidad. De ello se sigue que no podría esta Corte revisar la procedencia de atenuantes adicionales como la del artículo 11 número 9 del Código Penal, sugeridas en el recurso, imponiéndosela sin motivo al tribunal que dictó el fallo.

**11°)** Que, en consecuencia, las deficiencias procesales y falta de sustancialidad advertidas impiden a esta Corte entrar a conocer en propiedad el reproche recursivo efectuado, y por lo mismo, de ponderar la decisión



recurrida; razón por la que el presente recurso no puede prosperar y debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 373 b), 384 y 385 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad promovido por la defensa del condenado Matías Alejandro Cárcamo Pichunhuala, en contra de la sentencia pronunciada el dos de abril de dos mil veinticuatro y en contra el juicio oral que le antecedió, en el proceso RUC N°2300651632-7, RIT N° 302-2023, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Matus.

Rol N° 14.138-24

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso.





En Santiago, a siete de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

